

COSTA RICA, DEMOCRACIA Y ELECCIONES

Italo López Vallecillos

RESUMEN

La Costa Rica de los años 80 ya no es la misma de antes. Su crecimiento económico ya no parece responder a las expectativas del desarrollo integral exigido por la mayoría de los costarricenses. Costa Rica se está preparando para elegir un nuevo presidente en medio de esta crisis económica, la cual amenaza con desencadenar consecuencias sociales a mediano plazo.

Los candidatos presidenciales de 1986 tienen así planteado un dramático dilema. Todo el bienestar social, fruto del reformismo liberacionista, no puede continuar sin cambios profundos en la estructura económica y social. La cuestión fundamental es cómo la democracia costarricense, con su régimen político pluralista y su tradición pacifista puede sostenerse ante los embates de la crisis económica, cuyos efectos negativos se están sintiendo cada vez más en la población de escasos recursos.

Para que nuestros lectores conozcan directamente el pensamiento y las ideas de cómo los diferentes candidatos presidenciales piensan resolver este dilema si llegan a la presidencia de la república, ECA ofrece al final de estas páginas introductorias una entrevista exclusiva con cada uno de ellos.

Costa Rica es, en América Latina, un país atípico. La población es en su mayoría blanca, descendiente de colonos españoles asentados en la meseta central. El mestizaje, en relación al ex-

perimentado en El Salvador, Honduras y Nicaragua, es ínfimo. No tiene el problema étnico de Guatemala, donde todavía subsisten grandes núcleos de indígenas que hablan su propia len-

gua, conservan la cultura ancestral y rechazan por diversos medios la integración total a la nación criolla. Desde el siglo XIX Costa Rica ha fomentado la inmigración de extranjeros, en particular de alemanes, polacos, franceses, italianos, holandeses quienes una vez arraigados han dedicado su esfuerzo a la agricultura de exportación, el comercio, la banca y a industrias menores. Hay, por ello, conciencia social de que el país es diferente al resto de Centroamérica. Para muchos costarricenses es un orgullo considerarse una isla europea en el centro del trópico.

El territorio de Costa Rica es, apenas, de 50 mil kilómetros cuadrados. La población, según el último censo, es de 2.5 millones de habitantes, la mayoría con residencia en las zonas urbanas. El 50 por ciento vive en la región central del país, la cual a su vez, comprende el 15 por ciento de la totalidad del espacio físico. El 25 por ciento se aloja en la capital, una ciudad que tiende a crecer, no obstante la descentralización en cantones al estilo suizo. Las siete provincias en que está dividida la república, San José, Cartago, Heredia, Alajuela, Guanacaste, Limón y Puntarenas, en realidad responde a tres "países" en uno: el de la meseta central, con la características indicadas; Guanacaste, anteriormente perteneciente a Nicaragua y anexada por propia voluntad a Costa Rica en 1824, y cuya población mestiza se asemeja en costumbres y tradiciones a las personas de la costa del pacífico centroamericana; y Limón, zona atlántica, con numerosos negros que conservan las tradiciones propias de la cultura caribeña.

Estas observaciones no son medulares, en tanto Costa Rica ha logrado un adecuado equilibrio entre las tres vertientes, respetando e incluso fomentando los desarrollos particulares de la meseta central, Guanacaste y Limón. El alto nivel de seguridad social alcanzado por la población es, sin duda, el elemento que reafirma las enormes diferencias entre Costa Rica y el resto de América Latina. Baste señalar que el 90 por ciento de los habitantes son alfabetos y que la política educacional permite que los hábitos de lectura se mantengan más allá de la introducción primaria, secundaria, técnica y universitaria, mediante la difusión de libros subsidiados. Hay por lo menos tres editoriales estatales y dos semi-estatales que se dedican a esa labor que incluye publicaciones especiales para trabajadores agrícolas y urbanos. Otras cinco empresas privadas también editan libros y revistas de mediana

circulación interna. Otro aspecto que conviene destacar son las condiciones de salubridad, la tasa de mortalidad es de sólo 4 por mil, la mortalidad infantil es de 19 por mil, y un 77 por ciento de la población tiene acceso a agua potable. Estos aspectos explican por qué la tasa de crecimiento poblacional es del 2.6 por ciento anual, dado que si bien la salud pública es excelente, la educación juega un rol de primer orden en lo relativo a las normas de concepción natal. La tendencia es a bajar la expansión poblacional.

No obstante la crisis económica mundial, la inflación y la recesión, Costa Rica tiene un estándar de vida comparativamente mucho más elevado que el del resto de Centroamérica. El producto interno bruto de 1983 y a precios constantes de mercado es de 2.058.9 millones de dólares, del cual el 19 por ciento es de origen agrícola. Hay que advertir que Guatemala tiene 3.849.8 millones de dólares; Honduras 1.300 millones de dólares; Nicaragua 1.017.9 millones de dólares y El Salvador, según cifras de la CEPAL, 1.798.8 millones de dólares. El ingreso *per cápita* de Costa Rica es de 833.6 dólares por habitante; el menor en el área centroamericana corresponde a Honduras, 317.9.¹

La situación de Costa Rica desde el ángulo socio-económico tiende a deteriorarse a partir de 1978, debido en parte al alza de los productos derivados del petróleo, los combustibles y la adquisición de equipo, maquinaria, insumos y repuestos. El aumento del gasto público se refleja en una mayor burocracia estatal y en la inversión en obras públicas no siempre imprescindibles. El déficit fiscal se ha incrementado y el endeudamiento externo llega a 4.050 millones de dólares, uno de los más altos comparativamente considerado con los países latinoamericanos. Esto significa que sólo en servicio de la deuda, se ocupa el 32 por ciento de la exportación de bienes y servicios.

La debilidad estructural de la economía costarricense reside, como la del resto del área, en su limitada y exclusiva dedicación a la agricultura de exportación (café, algodón, tabaco, azúcar, cacao, banano), sujeta a las fluctuaciones internacionales del precio de los productos y a términos de intercambio desiguales. No obstante que en 1977-1978 el café alcanzó altísima cotización, significando el 19.4 por ciento del total de exportaciones, para 1980, según la CEPAL, el peso en tal rubro apenas llegó al 4.2 por ciento.

El estudio de la distribución del ingreso es, desde 1978, sumamente preocupante como lo demuestran los trabajadores dedicados al tema, entre ellos el de Juan Diego Trejos.² Costa Rica ha sido señalada como ejemplo de tendencias sociales igualitarias, ligadas a un proceso de bienestar general, en particular en lo que se refiere a empleo, vivienda, salud y educación. En el período de 1975 a 1980 la tasa de crecimiento del PIB *per cápita* fue 2.2 por ciento promedio mientras que en 1982 ésta cayó a -9.7, lo cual evidencia un descalabro.³

En cuanto a la salud de los habitantes es oportuno señalar que el seguro social cubre al 100 por ciento de la población, con los servicios de medicina externa, hospitalización y fármacos.

Los riesgos diferidos, invalidez, vejez y muerte, son parte de una atención generalizada que contribuye a la protección de todos los trabajadores. La salud preventiva está a cargo de un ministerio que combina sus esfuerzos con diversas instituciones estatales.

Los niveles de pobreza han sido tradicionalmente menores a todos los de los países de América Latina, lo cual se traduce en una estructura social más equilibrada y menos explosiva, cuya estabilidad se manifiesta en los hechos políticos.

Algunos analistas estiman que, en base a los censos de 1950, 1963 y 1973, se puede afirmar que la propiedad de la tierra está en proceso de concentración en menoscabo de los dueños de pequeñas parcelas, quienes se han visto arruinados y obligados a venderlas a grandes terratenientes. El número de asalariados en el campo ha aumentado en los últimos 25 años, desapareciendo gradualmente el minifundio en la meseta central. Las fincas de mediana extensión (150 a 400 hectáreas) se han ido internado en las zonas ganaderas de Guanacaste o en la bananera del atlántico.⁴

El aumento de impuestos, la falta de atención a los pequeños y medianos propietarios en lo que respecta al préstamo de avíos para las cosechas, una obsoleta política de comercialización de los productos agropecuarios, parecen ser la causa de la concentración de la tierra. Aun críticos del sistema lo atribuyen al nuevo modelo de acumulación capitalista impuesto a la nación a partir de 1948, el cual consideran agotado y hasta como un fracaso reformista ante los poderes oligárquicos.⁵

Si en el orden rural Costa Rica comienza a experimentar un descontento, un malestar, no sólo entre los peones y trabajadores agrícolas, sino entre los productores de leche, huevos, carnes, cereales, el problema comienza a expresarse desde la perspectiva popular en la toma de tierras del Estado y de particulares por parte de los llamados precaristas, sin que el gobierno pueda solventar la situación. El simple desalojo no resuelve la crisis y muchos campesinos emigran a San José y a las ciudades principales en busca de oportunidad, generando un subempleo mayor del 27.8 por ciento.⁶

Desde 1980 se observa una caída real de los salarios del 45 por ciento. Los trabajadores asalariados confrontan una crisis que parece no detenerse. El precio de la canasta básica en 1980 era de 1.470 colones mensuales, en 1981, un año después, subió a 3.367 y en 1985 es, aproximadamente de 3.476 colones. Se debe tener presente en este cuadro general que el salario mínimo es de 4.800 colones.

La enumeración de algunas cifras tiene como propósito llamar la atención sobre la crisis económica costarricense, y sobre las condiciones sociales que puede desencadenar a mediano plazo; esto considerando la forma responsable como el Estado en los últimos 35 años ha atendido las demandas de salud, educación, vivienda, alimentación en lo que podríamos calificar de ejemplo de seguridad y bienestar social. El dilema se plantea en términos dramáticos. Todo ese bienestar social, fruto del reformismo liberacionista, no puede continuar sin cambios profundos en la estructura económica y social. La cuestión es cómo, por qué medios políticos, el pacto entre las clases y las fracciones de clases puede redefinirse sin llegar a las formas violentas de otros países. El crecimiento económico, observado en particular de 1960 a 1985, no parece responder a las expectativas de desarrollo integral exigido por la mayoría de costarricenses.

La crisis iniciada en 1978 y acentuada en 1982 produjo gran conmoción en diversos estratos de la sociedad costarricense, dando lugar a duras críticas al modelo económico desarrollista adoptado por el país desde la revolución de 1948, modelo que sin duda alguna ha contribuido a mantener el equilibrio social y a consolidar la democracia social, participativa y representativa, que hace que Costa Rica goce de un verdadero pluralismo político y de un régimen político tolerante y abierto a todas las tendencias, sin autori-

**El dilema se plantea en términos dramáticos.
Todo ese bienestar social, fruto del reformismo liberacionista,
no puede continuar sin cambios profundos en la estructura.**

tarismo, y en el marco de un Estado de derecho, sin ejército.

Costa Rica es ejemplo de una democracia liberal, donde los derechos ciudadanos son respetados, las elecciones son libres y el sufragio es efectivo, los partidos políticos en la actualidad son 14 y expresan toda las tendencias e ideologías contemporáneas, desde las neo-facistas hasta las marxistas leninistas, el sistema de pesos y contrapesos permite el juego de poderes, los grupos de presión económicos ejercen su influencia, los trabajadores organizados se expresan sin violencia, y la absoluta libertad de expresión en particular de la radio y la televisión, ofrecen un panorama de enorme interés para otros países latinoamericanos que padecen regímenes excluyentes y totalitarios.

Costa Rica, luego de la revolución encabezada por José Figueres en 1948, ha modernizado su Estado por la vía del intervencionismo económico social. Las garantías sociales que se iniciaron con Rafael A. Calderón Guardia en 1940 mediante una alianza entre su Partido Republicano de tendencia liberal, la Iglesia católica bajo la inspiración del arzobispo Mons. Víctor Sanabria y la doctrina social del Papa León XIII y el Partido Comunista, se acentuaron con la llegada al poder de los social demócratas quienes dotaron al país de una avanzada legislación social en materia laboral, seguridad médica, educación (gratuita y obligatoria para la primaria y secundaria), autonomía de las universidades, libertad sindical en el campo y en la ciudad, nacionalización de la banca privada, impuesto del 10 por ciento sobre el capital, etc. La revolución del 48 dotó al país de la constitución de 1949 y tuvo como inmediata inspiración hacer respetar la soberanía popular expresada en las urnas. De ahí el pacto Ulate-Figueres, mediante el cual la junta fundadora de la segunda república, producto de la insurrección armada, una vez establecida la asamblea constituyente y aprobada la nueva carta magna, entregase el poder a Otilio Ulate, quien había triunfado en las elecciones de 1948 y a quien el calderonismo trató de negar, el acceso al poder. Desde 1949, la constitución de Costa Rica incorporó un nuevo poder a los tres tradicionales, *el poder electoral*, el cual asume y define el control

político durante y después del proceso de elección de nuevas autoridades. El sufragio, es así, garantizado plenamente. En 1953 se creó el tribunal supremo de elecciones, cuya organización, sistemas y métodos, son ejemplo para otros países. Hay que anotar un hecho de interés, el voto femenino en Costa Rica fue reconocido hasta 1953, no obstante el alto grado de desarrollo político del país.

El régimen de 1948 a 1985 ha combinado la educación cívica, la tolerancia política, la legalidad, el nacionalismo y las más diversas formas de control social para garantizar la paz y la seguridad, sin recurrir a los métodos violentos de coerción, excepto cuando los márgenes de permisibilidad se agotan.

Es importante agregar al anterior esquema político que la clase dominante en Costa Rica ha tenido la habilidad de crear espacios para que la élite política se exprese sin interferencias, dejando la administración de la cosa pública a técnicos e intelectuales supuestamente los más capaces en un sistema de alternabilidad en los poderes públicos por la vía de las elecciones, del respeto a la soberanía popular. Desde el siglo pasado, Costa Rica se ha educado en las normas, principios y prácticas democráticas, de modo que las dictaduras al estilo guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense no han prosperado. El militarismo no ha sido de mayor significación, excepto en la década del 15 al 20, y más bien por accidente que por una razón de Estado. Las instituciones civiles han sido armonizadas con las políticas, dando lugar a un pacifismo propio y contrario a toda forma de autoritarismo civil o militar. De ahí que a la revolución del 48 le fuese fácil disolver el ejército y crear, en su lugar, una guardia civil y rural para atender las cuestiones propias de policía y seguridad.

Dentro de esa estabilidad interna, basada en un pacto tácito de las clases dominadas bajo la mediación de la élite política, Costa Rica ha sido clara en subordinarse a la potencia hegemónica en el Caribe. Antes de 1850 sus relaciones externas predominantes eran con Inglaterra y los Países Bajos, desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX su alianza es con Estados Unidos,

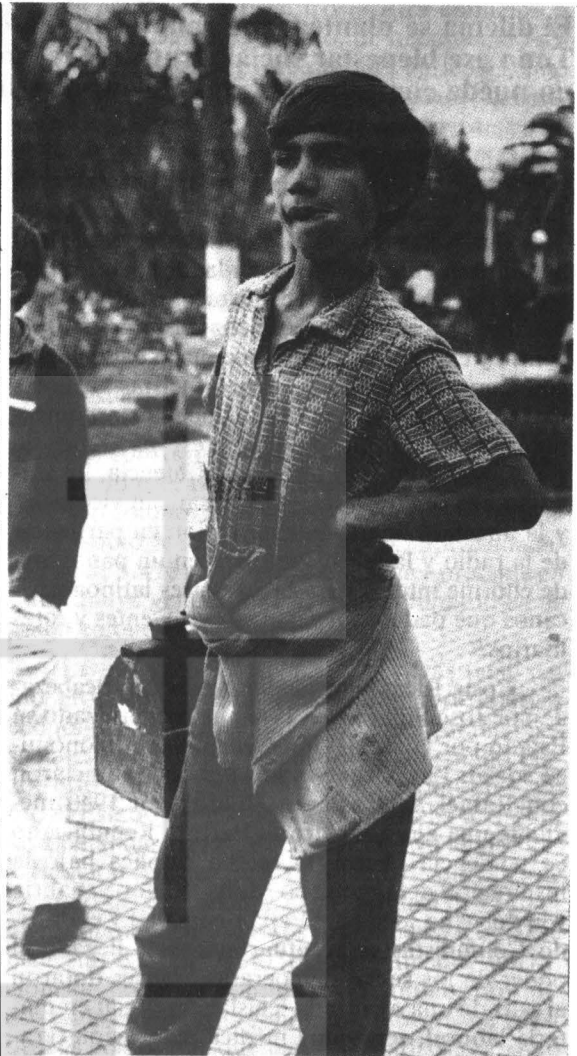
dentro de un pragmatismo geo-político que no permite equivocaciones. Esta posición ha sido congruente con sus intereses político-económico. Su adhesión al TIAR es frecuentemente reiterada, no obstante participar en los intentos pacificadores de Contadora. Sus ex-ministros de relaciones exteriores, en particular Gonzalo Facio y Fernando Volio Jiménez (este último candidato a diputado por PLN en 1986), han sido claros en oponerse al régimen de Managua y en apoyar la política de Reagan en Centroamérica.⁷

El anticomunismo de sus habitantes es mayoritario, evidente; así también su repudio a toda forma de militarismo excluyente, autoritario. Ambas tendencias son explotadas por los partidos institucionales, el *Partido Liberación Nacional* reformista por esencia y convicción, y el nuevo *Partido Unidad Social Cristiana* que se conformó en 1984 con los antiguos calderonistas y los grupos social-cristianos y neo-liberales en una acción de retorno a la economía social de mercado, de des-intervención estatal, de mayor influencia de la empresa privada en la economía y con algún tinte populista.

El hecho de que *Liberación Nacional* fundado por Figueres en 1951 y el *Unidad Social Cristiana* con la herencia calderonista sean, conforme las encuestas, los partidos de mayor arrastre y posibilidad electoral, no demerita a otros grupos que constituyen focos ideológicos de disputa, de disidencia, expresión misma de la lucha de clases y tendencias ideológicas al interior de la sociedad política.

Además del PLN y del PUSC se presenta en la escena política el *Partido Unión Nacional* (PUN), sector que jugó un gran papel en las elecciones anteriores a la revolución de 1948 y que era encabezado por Otilio Ulate y ahora, en 1985, luego de renovaciones internas es dirigido por el profesor universitario Oscar Aguilar Bulgareli con enfoques inteligentes sobre la realidad costarricense, aunque con poca base social en razón de su apareamiento tardío en la actual campaña política. A última hora la inscripción del candidato Aguilar Bulgareli fue cancelada por el tribunal supremo de elecciones, aduciendo vicios legales en la constitución de la asamblea general que lo nominó.

En 1982, el *Partido Liberación Nacional* ganó 568.374 votos, el 58.8 por ciento, el *Partido Unidad* que llevó de candidato a Rafael Angel Calderón Fournier obtuvo 325.187 votos, o el



33.6 por ciento. La derecha bajo el nombre de *Movimiento Nacional* sacó 37.127 votos.⁹ El abstencionismo se estimó en un 17 por ciento.

La izquierda que en las elecciones pasadas se unió para oponerse a los grupos de apoyo al calderonismo, a los conservadores que representaba Mario Echandi, a los reformistas de *Liberación Nacional*, tuvo a fines de 1983 una dura prueba. El viejo partido comunista, fundado en 1931 por Manuel Mora Valverde, se dividió en dos: el *Vanguardia Popular* (nombre y bandera con el que se presentó en numerosas batallas políticas) quedó bajo la dirección de Humberto Vargas Carbonell y Arnoldo Ferreto y el *Partido del Pueblo Costarricense* el cual, bajo la inspiración

de Mora Valverde, se fundó en 1984 y se inscribió en 1985 en el registro electoral. La separación de los comunistas ticos en momentos de crisis obedece a una diferente concepción de la lucha sindical, magisterial y gremial, y a una forma distinta de analizar las causas y perspectivas socio-económicas. Ambos partidos plantean una revolución social, con diferencia en métodos políticos, y alianzas que en la práctica los separan de un solo ideal. Tanto *Vanguardia Popular* como el *Partido Popular Costarricense* están organizados celularmente y ninguno ha descartado hasta el momento la lucha electoral, parlamentaria.

La alianza *Pueblo Unido* de la cual el partido comunista formó parte, alcanzó en las últimas elecciones presidenciales de 1982 un total de 32.186 votos, lo que equivale al 3.3 por ciento del electorado. Tal cantidad de votos la obtuvo en alianza con grupos socialistas, también actuantes en la escena política nacional.

En este momento la izquierda radical se presentará a elecciones bajo dos bloques, o pactos. La primera se denomina *Alianza Popular*, en la cual se ha unido *Vanguardia Popular* (uno de los partidos comunistas de Costa Rica) y el *Frente Amplio Democrático*, y la segunda, *Pueblo Unido* que aglutina al *Partido del Pueblo Costarricense*, (el otro partido comunista del país), *Partido Socialista Costarricense*, *Partido Radical Demócrata* y *Movimiento Nueva República*.

Alianza Popular lleva como candidato al Dr. Rodrigo Gutiérrez, médico, ex-decano de la facultad de medicina y quien anteriormente fue el representante de la izquierda en los comicios de 1982 y 1982.

Pueblo Unido lleva como candidato a Alvaro Montero Mejía, graduado en ciencias políticas, actual diputado a la asamblea legislativa y dirigente del *Partido Socialista Costarricense*. Las elecciones presidenciales tendrán lugar el 2 de febrero de 1986 y constituyen un reto para el pueblo costarricense en la línea de preservar la democracia social, representativa, y una opción hacia las fórmulas de solución económica, social y política que han presentado los partidos que participan en la contienda. El total de electores inscritos es de 1.486.474.

La cuestión fundamental es saber cómo la democracia costarricense, su régimen político pluralista, su tradición pacifista puede sostenerse ante los embates de una crisis económica que ya

causa efectos negativos en la población de escasos recursos. Los llamados sectores medios que se consolidaron después de la segunda guerra se encuentran bajo enorme presión, a punto de proletarizarse ¿Cómo y de qué manera los partidos y sus equipos de trabajo afrontarán el reto, una vez hayan ganado las elecciones de 1986? Muchas son las interrogantes en un país donde se lucha por la paz, la tranquilidad social, la estabilidad en todos los órdenes, pero donde también el deterioro económico y los efectos de pobreza comienzan a crear altos niveles de descontento en las masas. Hay cerca de 85 mil desocupados y la reactivación económica es lenta, no obstante las posibilidades que ofrece la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). La United Fruit Company cerró sus instalaciones en el Atlántico en 1985, pero se observa incapacidad para retomar las plantaciones de banano por parte del sistema cooperativo rural.

Si en 1978 y 1979 el gobierno de Rodrigo Carazo contribuyó a derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza es un ambiente de consenso nacional y en razón de lo anti-democrático del régimen nicaragüense, a estas alturas de 1985 las manifestaciones anti-sandinistas no sólo se dan en las esferas oficiales, sino también en amplias capas de la población. Se acusa al gobierno de Nicaragua de comunista y de exportar la revolución marxista-leninista a toda la región. El hecho es que hay una discrepancia política e ideológica con la revolución sandinista y todos los candidatos, con excepción de los de izquierda (Gutiérrez y Montero Mejía), están en franco desacuerdo con el vecino país. En la frontera, en el río San Juan, se producen constantes choques, algunos de los cuales han dado lugar al retiro de embajadores de ambas naciones. Costa Rica exige satisfacciones a Nicaragua por el incidente de mayo de 1985, en Las Crucitas, en el que murieron varios guardias civiles. En tanto el gobierno sandinista reclama por la presencia de "contras" en las zonas fronterizas quienes operan, según el presidente Ortega, con el visto bueno y la tolerancia de las autoridades ticas.

El presidente Luis Alberto Monge quien ha tenido que enfrentar la crisis económica, frente a la realidad de la producción y la exportación, la polarización de las clases sociales, la presión del desempleo y la inflación, las exigencias en la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional y la crítica pertinaz de la prensa y los partidos opositores, declaró en 1983 la neutralidad

perpetua y activa de Costa Rica, todo con el propósito de evitar un conflicto político-militar con Nicaragua y preservar la paz del país. En su partido, *Liberación Nacional*, hay opositores a esa alternativa.

Los viejos líderes de *Liberación Nacional*, José Figueres y Daniel Oduber, intentaron en 1984 dar su apoyo al economista Carlos Manuel Castillo, pero dentro de la democracia activa del partido se optó, mediante votaciones nacionales, por Oscar Arias Sánchez, quien además de abogado hizo estudios de ciencias políticas en Inglaterra.

La campaña política se ha centrado entre los dos partidos de mayor tradición y empuje, *Liberación Nacional* que postula a Oscar Arias Sánchez y Rafael Angel Calderón Fournier, abogado que opta a la presidencia de la república por el *Partido Unidad Social Cristiana*.

A diferencia de las "democracias formales" o de mentirillas, en Costa Rica la población se inscribe y milita sin temor en los partidos políticos, sea cual sea la ideología. Participan en forma activa en la campaña, colocan banderas en los techos de las casas, hablan en los parques y van de hogar en hogar haciendo proselitismo a favor de sus candidatos. Esto es así para todos los partidos, incluyendo los socialistas y comunistas.

Una muestra de la estabilidad política costarricense la constituye la forma de ascenso al gobierno. En ese lapso, solamente se ha producido una insurrección, en tanto en El Salvador ha habido 5 golpes de Estado; en Guatemala, 6; en Honduras, 5; en Nicaragua, 1.

Las revueltas cívicas y militares, las elecciones fraudulentas y sucesivas en las 4 restantes naciones de Centroamérica, las imposiciones, la violencia contra los ciudadanos y sus ideas, han conducido a la actual guerra civil en El Salvador, a la aguda crisis política que agobia a Guatemala desde 1954, a la tensión y conflicto permanente en Honduras y a la revolución nicaragüense instalada en el poder en 1979, tras 42 años consecutivos de tiranía somocista.

El siguiente cuadro permite establecer no sólo la institucionalidad de la democracia electoral en Costa Rica, sino también apreciar la tendencia al bipartidismo. La alternabilidad, el juego político, es una de las características que mejor definen al régimen político. El elector costarricense, se afirma, vota casi siempre por la oposición. Esta actitud se descubre entre los ciudadanos indecisos, sin afiliación permanente al PLN o al PUSC, y como reacción de inconformidad al grupo en el gobierno. Cerca del 28.5 por ciento de los ciudadanos no pertenece a ningún partido y en determinada situación inclina las elecciones

AÑO	ASUME LA PRESIDENCIA	FORMA DE ASCENSO	PARTIDO
1944	mayo: Teodoro Picado	Elecciones	Republicano Nacional
1948	abril: Santos León Herrera	Insurrección	"
	mayo: José Figueres	Insurrección	"
1949	nov.: Otilio Ulate	Designado por la asamblea constituyente. Reconocimiento de su elección popular por el pacto Ulate-Figueres.	Unión Nacional
1953	nov.: José Figueres	Elecciones	Liberación
1958	mayo: Mario Echandi	Elecciones	Unión Nacional
1962	mayo: Francisco Orlich	Elecciones	Liberación
1966	mayo: José J. Joaquín Trejos F.	"	Unificación Nacional
1970	mayo: José Figueres	"	Liberación
1974	mayo: Daniel Oduber	"	Liberación
1978	mayo: Rodrigo Carazo	"	Unidad (Renovación Democrática)
1982	mayo: Luis A. Monge	"	Liberación

hacia uno u otro sentido. Estos votos privilegiados son el objetivo de las campañas políticas, dado que las clientelas partidarias están, más o menos, delimitadas.

La campaña electoral de 1985-86 ha pasado por diferentes etapas: 1) la guerra de las encuestas, especialmente entre Liberación Nacional y el PUSC; 2) la guerra de las banderas, para determinar quien era más aceptado o no; 3) la guerra de las consignas en radio, televisión y prensa; 4) la guerra del diálogo frente a frente en televisión para exponer ideas, programas y proyectos; y 5) la guerra por obtener el voto de los ciudadanos.

Es un hecho que los partidos minoritarios, el *Partido Unión Nacional* (PUN), las coaliciones de *Alianzas Popular y Pueblo Unido* y otros que participan sólo en algunas regiones y provincias, no tienen acceso a los grandes medios de comunicación social en las proporciones propagandísticas del PLN y del PUSC. Y en este momento, dada la división, las expectativas son pesimistas. El PUN como indicamos quedó fuera de las elecciones.

En todo caso, en Costa Rica la campaña política es financiada proporcionalmente por el Estado de acuerdo al número de votos que obtienen los partidos en las elecciones. La deuda política, adquirida por las organizaciones es cancelada luego por el gobierno. Los dirigentes son responsables de su manejo y en caso de devolución, por escasos votos a favor de determinado partido, éstos la pierden.

Se estima que, por lo menos, la deuda política en Costa Rica cuesta al Estado alrededor de 850 millones de colones, cerca de 16.3 millones de dólares. Los partidos, en este caso los 4 más destacados, invierten mediante contribuciones de miembros y simpatizantes una suma adicional a la deuda, difícil de cuantificar, pero que se estima en 700 millones de colones.

Con el propósito de que los lectores de *Estudios Centroamericanos* conozcan el pensamiento y las ideas de los candidatos presidenciales de Costa Rica, en una hora decisiva de la historia del país, y en un momento clave para la democracia social y el régimen civilista de los costarricenses presentamos a continuación una entrevista de carácter exclusivo.

Posición de los candidatos presidenciales de Costa Rica (1985-1986) ante los problemas del país.

ECA. De ser electo presidente de la república en 1986, ¿cómo afrontaría su gobierno la crisis económica que agobia a Costa Rica?

Oscar Arias Sánchez:

La economía de Costa Rica ha experimentado en el último decenio la peor crisis de su historia. Un complejo conjunto de factores externos, características estructurales de la producción interna y el sector público, y especialmente al desafortunado manejo de la política económica durante la anterior administración del Partido Unidad, determinaron el inusitado deterioro económico y financiero del país.

Ante la crítica situación, el gobierno del presidente Monge ha ejecutado un duro y austero programa de estabilización y reconstrucción de la economía, cuyos resultados el país ya ha empezado a sentir, además de que se han sentado las bases necesarias para iniciar un nuevo programa de transformación y desarrollo. Así después de 3 años de administración liberacionista, el año pasado la producción nacional creció un 6.6 por ciento en términos reales, una de las tasas más altas de América Latina; la inversión privada ha empezado a recuperarse; el consumo familiar aumentó considerablemente; las finanzas públicas se sanearon totalmente; el desempleo de la fuerza laboral se ha reducido; se consolidó la estabilidad interna (baja inflación) y externa (estabilidad en el tipo de cambio) y se han cumplido de nuevo todos los compromisos financieros con el exterior.

En este orden de ideas, el planteamiento económico del próximo gobierno de Liberación Nacional se centrará en hacer una realidad la transformación de la estructura de producción y exportación del país, a la vez que se alcanzará un mayor acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Se trata, entonces, de modernizar y reactivar la producción nacional, esencialmente a través del incremento de las exportaciones de productos no tradicionales a terceros mercados, al tiempo que se logra una democracia de muchos propietarios, en vez de una democracia de muchos proletarios. Estos dos grandes objetivos establecen el marco general de referencia que guiará la política económica del próximo gobierno.

Rafael A. Calderón Fournier:

Obviamente la crisis económica de Costa Rica es grave. Es un compromiso que asumo libremente: tengo que vencerla en mi gobierno, al igual que otras dificultades sociales y humanas. Quiero contar con el apoyo de todo el país para darle la cara a estas dificultades. Creo que la economía debe, además de estabilizarse, reactivarse. La reactivación será posible únicamente si damos seguridad al inversionista, dándole a conocer las reglas del juego. Y si hay confianza local e internacional. Pretendo que buena parte de la ayuda foránea se canalice hacia la empresa particular a fin de que ésta contribuya, con su producción, a generar empleos, a pagar impuestos y cargas sociales y a subir el ánimo de los compatriotas, a veces desesperanzados por la falta de trabajo, de vivienda, de oportunidades en general. Tengo dos compromisos: con la producción y con la justicia social. La reactivación irá dirigida en esas dos vertientes.

Rodrigo Gutiérrez:

La coalición Alianza Popular suscribe un programa de gobierno que ha surgido de las conversaciones celebradas entre el Partido Vanguardia Popular y el Frente Amplio Democrático, de organizaciones cada una con su propia identidad ideológica; el primero, marxista-leninista y el segundo, con claras posiciones de izquierda. El programa plantea, claramente, las medidas que deben tomarse ante una crisis económica, social y política que el gobierno del presidente Monge descarga sobre las espaldas de las mayorías populares.

¿Como definimos nosotros los rasgos principales de la crisis nacional?

Señalamos factores externos y factores internos: entre los factores externos, consideramos que el principal es la división internacional del trabajo que nos han impuesto los países industrializados, especialmente Estados Unidos. En esa forma se nos asigna el papel de proveedores de materias primas y ellos de productores industriales y de capital, relación económica comercial que aumenta permanentemente nuestra dependencia económica y política, y asegura la reproducción interna de la crisis del capitalismo mundial. Por cierto, que el "modelo económico nacional" lo consideramos semejante al impuesto a cada país centroamericano y en conjunto al área centroamericana: explotación de la mano de obra barata en la industria de maquila y ensamblaje; zona de importancia comercial y militar, por su angostura, por lo que se nos señala como sitio adecuado para facilitar el tránsito interoceánico (oleoductos, ferrocarriles interoceánicos, muelles secos, etc.) sin dejar de lado la importancia de un mercado consumidor que se acerca ya a los 20 millones de habitantes. Entre los factores externos también incluimos como detonante importante en la crisis, el aumento constante en los precios de los energéticos y el acelerado endeudamiento del país a partir de 1972.

Entre los factores internos incluimos: el control, cada vez más oligárquico, de los gobiernos de los últimos 40 años. La extraordinaria y acelerada concentración de la tierra en muy pocas manos y en poderosas empresas extranjeras, con la emergencia de más de 160,000 familias campesinas sin tierra o con muy poca tierra. Un sistema impositivo crónicamente injusto que hace recaer el grueso del gasto público sobre los consumidores. El uso del crédito internacional para financiar obras no reproductivas. La protección de empresas industriales extranjeras, especialmente norteamericanas y japonesas, que quebraron la industria nacional. Una producción industrial con materia prima importada, desechando la nacional (como es el caso de la producción algodонера, hoy extinguida, a pesar del importante rubro de la producción textil sintética nacional en manos de transnacionales). La instalación de industrias extranjeras sin tomar en cuenta los intereses nacionales. Todo este conjunto de hechos que conforman la "política" nacional de desarrollo nos ha llevado al empobrecimiento acelerado por la vía de la sobreexplotación de la mano de obra, la descapitalización nacional por medio de la quiebra de los medianos y pequeños industriales nacionales, el agotamiento de la escasa capacidad de ahorro del trabajador, una deuda externa millonaria, una matriz in-

dustrial supeditada a la materia prima importada y producida por los países industrializados, y la internacionalización del consumo nacional (Sears, Pops, Pizza Hut, Pollos Kentucky, etc.).

El programa de gobierno de Alianza Popular lleva como objetivo fundamental reorientar el proceso de desarrollo económico para encauzarlo por la vía de la satisfacción de las necesidades básicas de nuestro pueblo, disminuir la dependencia y consolidar nuestra soberanía nacional. Los principales puntos de nuestro programa de gobierno pueden sintetizarse de la siguiente manera:

- 1) Liberar a nuestra patria de las imposiciones del FMI y lograr una auténtica independencia económica.
- 2) Declarar una moratoria del pago de la deuda externa y unir esfuerzos con otros países deudores para lograr un trato más justo de los países acreedores y luchar por el establecimiento de un orden económico más justo.
- 3) Una política exterior de paz y convivencia pacífica con los otros países de Centroamérica.
- 4) Defensa de la independencia, la soberanía y la dignidad nacional frente a la prepotencia del gobierno de Estados Unidos, que pugna hoy por convertir a nuestro país en una base de agresión contra la revolución popular sandinista y contra otros pueblos hermanos.
- 5) Realizar una verdadera reforma agraria que garantice tierra a los campesinos, que carecen de ella o la tienen en cantidad insuficiente para llenar sus necesidades familiares.
- 6) Nacionalización del comercio exterior y efecto control de la inversión extranjera.
- 7) Disminución de la carga de impuestos que pesa sobre los salarios de los trabajadores y que está arruinando a los pequeños y medianos empresarios, en tanto que grandes grupos monopolistas, casi siempre extranjeros, gozan de millonarios privilegios fiscales.
- 8) Detener la mano de los especuladores por medio de la congelación de precios de los artículos de más amplio consumo popular.
- 9) Disminuir los precios de los insumos agrícolas para los pequeños y medianos productores y garantizarles seguros de cosechas y préstamos a bajo tipo de interés. El Estado deberá controlar las fluctuaciones de precios organizando la producción nacional que incluye desde precios de sustentación adecuados para los productores hasta el desarrollo de los sistemas de almacenamiento y conservación de la producción, caminos de penetración, sistemas de riego, mecanización, transportación de la producción, etc.
- 10) Aumentos de sueldos semestrales no inferiores, en ningún caso, a la tasa de inflación acumulada.
- 11) Control de precios y eliminación de todos los impuestos a los materiales dedicados a la vivienda popular, tanto para la construcción de nuevas casas como para la reparación de las mismas. El Estado dedicará no menos del 5 por ciento del presupuesto consolidado del sector público a la construcción de viviendas populares.
- 12) Mejoramiento de los servicios de salud pública, principalmente los que presta la Casa Costarricense de Seguro Social.

La cuestión es cómo, por qué medios políticos, puede redefinirse el pacto entre las clases y las fracciones de clases sin llegar a las reformas violentas de otros países.

13) Garantía de facilidades de estudio para todos los niños y jóvenes, en base a la entrega gratuita de útiles escolares y el establecimiento de tarifas de transporte disminuidas para los estudiantes y profesores.

14) Financiación adecuada de los centros de enseñanza superior, de manera que permita su democratización.

15) Respeto al derecho a la firma de convenciones colectivas, al derecho de huelga y la derogatoria de los artículos 333 y 334 del código penal.

16) Respeto de las libertades democráticas de los ciudadanos, luchando a fondo contra la arbitrariedad policiaca que se manifiesta principalmente contra los sectores más pobres de la población que reclaman justicia.

Alvaro Montero Mejía:

Debo manifestar, en primer lugar, que afrontar la crisis económica que agobia a Costa Rica no es solamente la tarea de un gobierno ni de un periodo presidencial. El problema es de fondo, pero los gobiernos constitucionales que se han sucedido en los últimos años en la democracia liberal costarricense, lejos de dar una respuesta adecuada a los grandes problemas estructurales, económicos y sociales del país no han hecho más que reiterar con diferentes ropajes, los patrones de un sistema social caduco, que se acompaña invariablemente de la dominación extranjera.

En Costa Rica, y pensamos que ocurre lo mismo en la mayor parte de los países de América Latina, no existe otra

salida como no sea un cambio profundo, hacia la igualdad social y la democracia integral.

Porque evidentemente no estamos sólo en presencia de inadecuados procesos de distribución de la riqueza. No es solamente que, como ocurre en nuestro país, las ocho décimas partes de la riqueza producida quede en manos de un porcentaje reducidísimo de empresarios, de terratenientes y de financieros privados. Aún pensando en mecanismos de distribución menos desiguales, quedarían pendientes las transformaciones estructurales, a través de las cuales puede generarse un auténtico proceso de desarrollo económico y social, capaz de satisfacer las necesidades crecientes del pueblo y las justas expectativas de progreso permanente, de independencia y soberanía. Es frente al reto de desarrollo económico, frente al reto de la deuda externa, frente al reto de la masificación de la cultura, del deporte, de la vivienda, de la alimentación, del vestido, del trabajo; frente al reto de una democracia que satisfaga los anhelos de libertad, de participación y poder real de las grandes mayorías en la conducción del Estado, donde chocamos no sólo con los mecanismos de distribución, sino con estructuras económicas e instrumentos de dominación política, que imposibilitan cualquier auténtico proyecto de reactivación económica, de crecimiento económico, de libertades públicas cada vez más eficaces y de independencia nacional.

En Costa Rica, un gobierno popular y democrático, tendría que enfrentarse a la existencia de 100 mil desocupa-



dos, de más de 75.000 campesinos sin tierra que demandan fuentes de trabajo y medios de producción en los cuales desplegar toda su capacidad productiva, a 175.000 familias que demandan vivienda y a 700.000 asalariados que todos los días reclaman mejores condiciones de trabajo y de salarios. Porque Costa Rica, contrariamente a lo que piensan algunos que la imaginan como una especie de arcadia, encontramos el 43 por ciento de la tierra cultivable en manos de 1.000 propietarios lo que reducido a familias significa un número aún menor de poseedores. Probablemente no pasa de 200 el número de familias, más 3 ó 4 grandes compañías internacionales, en cuyas manos se encuentra la mitad de toda la tierra cultivable del país y no es abusivo añadir, que poseen también la mejor tierra.

Otros problemas, para cuya solución al menos en teoría, no necesitaríamos transformar todo el orden social, se encuentran inscritos dentro de estructuras de propiedad absolutamente anacrónicas. No se podría pensar por ejemplo en una reforma urbana que iniciara la solución de los agudos problemas de vivienda, si no se afecta la propiedad de los urbanos y semi-urbanos en manos de consorcios financieros y de grupos privados que esperan solamente el advenimiento de mayores cuotas de "plusvalía."

Resolver la crisis económica significa enfrentar y derrotar esas fuerzas. Como se ve, no es sencilla la tarea actual de hacer más prósperos y libres a nuestros pueblos. Por eso estamos empeñados en un esfuerzo por no reiterar viejas consignas, soluciones de corte doctrinario que bien pueden satisfacer nuestros oídos, pero no la realidad concreta en que nos desenvolvemos.

ECA. ¿Cuál será la actitud de su gobierno frente a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial en concreto respecto a la deuda externa que tiene Costa Rica con dichos organismos?

Oscar Arias Sánchez:

Mi actitud será la misma que tendré siempre que deba negociar aspectos que atañen a los más altos intereses nacionales. Actuaré con firmeza, pero sin prejuicios, recordando que el bien de Costa Rica está de por medio y sobre todo que miles de compatriotas pueden verse perjudicados si las negociaciones no se conducen en la forma debida.

A mi juicio, lo esencial aquí es ser objetivo y partir de cuáles son las posibilidades reales del país. Costa Rica tiene una deuda externa sumamente alta, en proporción al monto de nuestras exportaciones y al del producto Interno Bruto (PIB), deuda que le debemos principalmente al gobierno anterior. Esto significa que nuestras posibilidades de crecimiento y manejo de la economía están supeditadas al servicio de la deuda. Por lo tanto, estamos comprometidos a tener buenas relaciones con la comunidad financiera internacional, y creo que es la opción menos costosa, aunque algunas de sus medicinas no nos gusten. En lo que sí debemos mantenernos muy firmes, como lo ha hecho el actual gobierno, es en lo que se refiere a los programas sociales, pues está en juego el bienestar de nuestro pueblo.

Rafael A. Calderón Fournier:

La deuda externa, como se encuentra hoy, no puede ser pagada por un país con baja producción, aunque la deuda debe pagarse. Tenemos que honrar nuestras obligaciones. Sin embargo, no se nos debe atenazar, ni podemos sacrificar los

programas sociales sólo para pagar lo que debemos. Entonces habrá que llegar a acuerdos básicos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial para que entiendan que no han de estrangularnos si es que la paz social se quiere mantener en este país —y deseamos mantenerla a cualquier costo. Lo esperable, entonces, es que esos organismos entiendan que ciertas recetas que han fallado en otros lados, no pueden repetirse aquí. Lo lógico sería que se nos diera un respiro por cierto plazo, digamos cinco años, de forma que destinemos un porcentaje fijo racional del Producto Interno Bruto para amortizar, y que en el futuro se nos concedan condiciones mejores de plazos e intereses en aras del mantenimiento de aquellas paz social tan necesaria en todos los países latino-americanos.

Rodrigo Gutiérrez:

La deuda externa de Costa Rica se acerca ya a los cinco mil millones de dólares. Habría que destinar alrededor de 600 millones de dólares para pagar los intereses anuales. Exportamos alrededor de 800 millones de dólares e importamos 1100 millones de dólares. El FMI le exige al gobierno aplicar 6 medidas: congelar salarios durante todo el año 1985-86; aumentar el precio de los combustibles; reducir en mil millones de colones el gasto público que equivale a desocupar miles de trabajadores y parar importantes obras sociales; aumentar las tarifas de los servicios públicos (agua, luz, teléfono); poner a flotar el dólar y quitar las subvenciones a artículos de consumo popular.

Se desprende de esta situación que Costa Rica no tiene ninguna capacidad para pagar ni los intereses de su deuda ni menos aún la deuda misma; las medidas que le impone el FMI buscan salvar el sistema monetario costarricense, al mismo tiempo que reducen el nivel de vida del pueblo, para que sobren los dólares que le permita al gobierno costarricense hacer algunos pagos a sus acreedores.

Nosotros defendemos el derecho de Costa Rica a no pagar la deuda. Tampoco aceptamos las imposiciones del FMI porque hacen recaer en las mayorías el costo de una deuda externa que en muy poco ha favorecido el bienestar popular. El grueso de la deuda ha beneficiado a la gran empresa privada.

Alvaro Montero Mejía:

Costa Rica ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional varios acuerdos que se enmarcan dentro de la más clásica y opresiva práctica político-financiera de este organismo. En esos acuerdos se establecen entre otras medidas, el congelamiento de salarios, la restricción radical a los gastos sociales del Estado, una política de "austeridad" orientada fundamentalmente a que el país ahorre lo suficiente para pagar su deuda externa y una aceptación implícita a la liberalización creciente de la economía del país, facilitando enteramente la participación del capital privado nacional e internacional en la economía costarricense. Para la aplicación de esas políticas, el Fondo Monetario Internacional cuenta con el apoyo sistemático de la Agencia Internacional de Desarrollo AID que opera en Costa Rica, como la mano derecha de valor inapreciable, del mundo financiero internacional. Entre el Fondo Monetario y la AID, el gobierno se ve obligado a marchar por los carriles de una política económica antipopular brutalmente restrictiva, y desde luego contraria a la soberanía nacional. No hay que perder de vista, que la democracia liberal de Costa Rica constituye una pieza codiciada por Estados Unidos para el planeamiento y aplicación de su política económica y militar en Centroamérica.

En ese sentido, la economía internacional juega el papel de una potente maquinaria de chantaje político, en la que se obliga a Costa Rica a cambiar soberanía por dólares de limosna. Si nuestra economía no se ha colapsado, se debe en primer lugar al inmenso sacrificio que se le impone al pueblo cuando se obliga al Estado a hacer descomunales economías para atender el servicio de la deuda, y en segundo lugar, a los aportes financieros que la AID le entrega al gobierno de Costa Rica. De este modo, los millones de dólares provenientes de las donaciones de la AID, juegan el papel de un instrumento similar a la batuta del director de orquesta que conduce, en función de objetivos programados, las actuaciones y las decisiones del gobierno y las instituciones del país. Costa Rica tiene una de las deudas per cápita más elevadas del mundo. Nuestra deuda externa asciende aproximadamente a 5.000 millones de dólares para 2 millones y medio de habitantes. Este año, por servicio de esa deuda, estábamos obligados a pagar aproximadamente 700 millones de dólares, pero en virtud de un acuerdo de última hora, la amortización y los intereses se reducirán aproximadamente a 480 millones de dólares. Como se ve no hacemos más que transferir las obligaciones actuales, a un futuro cercano. Nadie puede dudar que los próximos años serán más difíciles y las cargas más pesadas e incompatibles con la estructura económica y las posibilidades reales del país. Aún con todos los arreglos señalados, el servicio de la deuda externa alcanzará este año el 50.5 por ciento del total del valor de las exportaciones previstas. Si tomamos en cuenta que nuestra balanza comercial es permanentemente deficitaria en casi 150 millones de dólares anuales, que las importaciones indispensables alcanzan una suma cercana a los 800 millones de dólares, y que las exportaciones no superan los 900 millones de dólares al año, no es necesario hacer complejas operaciones aritméticas para demostrar el carácter absolutamente impagable de la deuda externa de Costa Rica y el sacrificio sin nombre a que son sometidos el pueblo y la economía del país por parte de los organismos financieros internacionales.

Un gobierno nuestro debe tomar en cuenta la dudosa eficacia de un esfuerzo nacional, aislado, proveniente de un país pequeño, sin recursos económicos, si ese empeño por resistir las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, no se mancomunara con decisiones y esfuerzos de alcance latinoamericano. Por eso nuestra primera tarea iría encaminada hacia la formación de un club de deudores de América Latina y el tercer mundo para resolver definitivamente una moratoria de largo alcance que tendría que desembocar finalmente en el no pago de la deuda. Ante la alternativa de si pagar o comer, nosotros estamos y estaremos invariablemente por el derecho a la vida, por el derecho al progreso y al bienestar de nuestro pueblo. Es la única posición compatible con los intereses económicos y políticos de un país pobre y atrasado, pero que pretende ejercer plenamente su soberanía.

ECA. Ante el estancamiento del mercado común centroamericano, ¿qué posición adoptará su gobierno? ¿Qué medidas podrían revivir el modelo de desarrollo regional?

Oscar Arias Sánchez:

Si bien creo que a futuro y durante un cierto lapso la base para la reactivación de nuestras economías estará en los terceros mercados, de manera complementaria el mercado común centroamericano es crucial para muchas empresas y para el desarrollo autónomo del país. En primer lugar, debemos buscar condiciones que permitan la reactivación de cada una de las economías centroamericanas, mediante un creci-

miento sano y sostenido, y en segundo término, trabajaremos en coordinación con los demás países del área para lograr un financiamiento externo para los organismos regionales, de modo que el comercio en el área se pueda restablecer. Lo que hay que tener claro es que sería parcial pensar en una solución sólo de terceros mercados o sólo de mercado común centroamericano. Lo que es crucial es buscar activamente la paz a nuestra región. Sin paz difícilmente habrá desarrollo.

Rafael A. Calderón Fournier:

El mercado común centroamericano está estancado, ciertamente. Las opciones son dos: revitalizarlo, revertiéndolo, o abandonarlo y entrar en el terreno de los tratados bilaterales. También habría que pensar en depender menos de ese mercado y mirar también hacia los mercados nuevos que tienen anchas perspectivas para las exportaciones no tradicionales.

En las condiciones actuales no parece posible, pero sería ideal que reformuláramos la estrategia del mercado común centroamericano, rectificando todo lo que a la luz de la experiencia del último cuarto de siglo nos parece que fue equivocado. Aquí otra vez vemos cómo el ponerse de acuerdo de Centroamérica es importante no sólo para mantener y consolidar la paz, y restituirla donde ha sido dañada, sino también para conjuntar nuestros intereses materiales que han de ser sostenidos de los espirituales y de los afanes integracionistas.

Rodrigo Gutiérrez:

Nosotros defendemos el derecho de nuestro país a desarrollarse independiente y soberanamente para lo cual debemos unir los esfuerzos nacionales solidariamente con los que realizan, con el mismo fin, otros países latinoamericanos, del África y Asia (p.e. el movimiento no alineado) para establecer un nuevo orden económico mundial que garantice un trato justo en las relaciones comerciales y en general, económicas, entre países. Al mismo tiempo, consideramos a Centroamérica y Panamá y a los países de la Cuenca del Caribe como una unidad geopolítica de la que formamos históricamente parte integral y cuyo desarrollo económico independiente es indispensable para impulsar y consolidar nuestro propio desarrollo. Por esto es que exigimos respeto absoluto a la independencia y soberanía de nuestros países, terminación de la ocupación colonial, de las bases militares y de cualquier otra forma de intervención de países fuera del área.

Específicamente en cuanto a la reactivación del actual modelo de mercado común centroamericano que ha favorecido especialmente a las transnacionales y a las burguesías de nuestros pueblos, no le veo posibilidades de reactivación sin incorporar a Nicaragua, bloqueada hoy por Estados Unidos. Además el proyecto por sí mismo está terminando y no ofrece ninguna perspectiva, inclusive para esas mismas transnacionales y burguesías.

Alvaro Montero Mejía:

Cuando el mercado común centroamericano era sólo un proyecto teórico, fue originalmente concebido como la integración económica regional capaz de reactivar el desarrollo de la producción local y la consolidación de industrias nacionales en manos de las burguesías centroamericanas. Los capitalistas del área, se mostraban evidentemente interesados en la creación de este tipo de modelo económico que vendría a fortalecer su participación en un mercado más amplio y con un potencial de expansión significativo. Pero la historia

marchó por otros rumbos. El mercado común centroamericano cayó en manos de las empresas transnacionales que transformaron el antiguo control comercial que ejercían sobre una parte significativa de los mercados locales, en inversiones industriales y pseudo-industriales, dedicadas a la producción regional de manufacturas o al simple ensamblaje, empaquetamiento, montaje o embalaje de productos terminados. En algunos países, la participación de los capitalistas locales fue mayor y la expansión económica los colocó en condición de industriales más poderosos o bien en socios menores de las empresas multinacionales.

Pese a todo, apareció en Centroamérica una clase obrera nueva, joven, relativamente inexperta, pero llamada a cumplir un extraordinario papel en la historia de nuestros pueblos. Desde el punto de vista económico el mercado común centroamericano no se convirtió en el mercado para la sustitución de importaciones, sino en una maquinaria de erosión fiscal, acompañada por el desarrollo de industrias monopólicas, en un mercado cautivo en el que se eliminaron otras formas de la competencia internacional y en un terreno propicio para la expansión económica de Estados Unidos en esta región del mundo.

A estas alturas, el mercado común centroamericano ha dejado de ser solamente un hecho económico para convertirse en un asunto político de primer orden. El intercambio regional sigue jugando un papel muy significativo en el comercio exterior de nuestros países, pero es impensable el desarrollo y fortalecimiento de ese comercio o de un nuevo mercado común que cumpla una función activa en el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, si al interior de nuestros países las grandes mayorías populares siguen postergadas, víctimas de medios cada vez más sofisticados y máximos de represión y si al mismo tiempo se consolida la presencia, ya masiva, de carácter no sólo económica, sino militar, de la potencia norteamericana en el istmo centroamericano.

Un nuevo concepto de mercado común centroamericano, necesario desde todo punto de vista, pasa por la paz en Centroamérica, por la instauración de regímenes democráticos que sean auténticos representantes de los pueblos y por la exclusión de toda forma de intervención externa, ajena a los intereses de nuestros países.

ECA. Dados los altos niveles de inflación, desempleo, recesión económica, escasez, ¿cómo tratará su gobierno de satisfacer las demandas populares?

Oscar Arias Sánchez:

El empobrecimiento que Costa Rica tuvo en los últimos años, especialmente durante la administración del Partido Unidad, ha planteado una crítica situación social, que nos obliga a satisfacer mucho más ordenada y racionalmente las demandas populares. En este sentido, la política económica del próximo gobierno impulsará decididamente la acción del Estado, con el propósito de obtener, paralelamente a la transformación de la economía, un conjunto de programas sociales que, dentro de las posibilidades reales del país, permita paulatinamente, pero fuertemente compensar el nivel de vida que los costarricenses tuvimos antes del gobierno anterior. Hemos diseñado, por ejemplo, un ambicioso plan de construcción de viviendas para sectores bajos y medios, que va orientado en ese sentido. Costa Rica no puede desarrollarse con base en un empobrecimiento mayor de los grupos más débiles, como lo hacen algunas otras naciones y como en alguna medida lo está proponiendo el Partido Unidad. Todo lo

anterior, el proceso de transformación productiva que impulsaremos será el medio de lograr un mejor nivel de vida para los trabajadores.

Rafael A. Calderón Fournier:

Las demandas populares son crecientes y la población también. La inflación, el desempleo, la recesión económica y la escasez son resultantes de nuestros bajos índices de producción, de la falta de iniciativas vigorosas y nuevas, para usar los recursos externos de manera que ellos sirvan para aumentar aquella producción y dar bienestar a todos. Por eso postulo la necesidad de dar incentivos a la producción y a la inversión foránea. Por ejemplo, bajando la tasa de imposición marginal a las ganancias, pero dictando leyes severas contra la evasión del pago de impuestos. Para resolver los males citados en la pregunta, tendríamos que referirnos también a las respuestas contenidas en el punto No. 1.

Rodrigo Gutiérrez:

Esas medidas están contenidas en el programa enunciado en la respuesta a la primera pregunta. Pero quiero agregar que, además de esa plataforma electoral, tenemos redactado ya un plan nacional de desarrollo conformado en programas sectoriales (salud, vivienda, educación, agropecuario, industrial, etc.).

De ese plan, concebido como verdadera matriz económica, social y política, se modela el nuevo tipo de democracia, de sociedad, de patria a la que aspiramos.

Alvaro Montero Mejía:

Durante muchos años, Costa Rica ha vivido inmersa en una concepción del bienestar y el progreso, sostenida por columnas de barro. Una parte importante del endeudamiento externo proviene del masivo financiamiento de las importaciones con crédito externo, dándole a las clases medias una apariencia de bonanza y bienestar eminentemente ficticia. Otro de los pilares de esa concepción ha sido la de fundamentar el desarrollo económico en el progreso de las exportaciones y otra se refiere a la supuesta necesidad de nuestros pueblos de importar masivamente capitales de inversión. En lo que respecta a las exportaciones, salta a la vista la imposibilidad de reactivarlas o hacerlas crecer significativamente, y sobre todo en un contexto en que los términos de intercambio se deterioran todos los días. Lo de la importación de capitales, aparece como un elemento inútil, si tomamos en cuenta los miles de millones de dólares que fueron traídos del extranjero y que hoy se han convertido en una carga insostenible de 5.000 millones de dólares de deuda externa. Todo depende pues de las premisas sociales internas. Nosotros desde luego, no estamos en contra de exportar, estamos en contra de hacer girar el progreso de Costa Rica en función de su capacidad exportable. En un mundo donde los términos de intercambio erosionan a nuestras débiles economías, la exportación creciente es otra manera de transferir capitales a los países desarrollados: es cambiar el esfuerzo nacional por la acumulación de riqueza en manos de los países importadores de nuestras materias primas y nuestros productos agropecuarios.

Sin pregonar una autosuficiencia que no se aviene con las condiciones del mundo moderno, nuestra tarea primordial es alimentar al pueblo, satisfacer sus crecientes demandas, basándonos en el esfuerzo nacional como soporte básico para el desarrollo.

En Costa Rica la clase dominante ha tenido la habilidad de crear espacios para que la elite política se exprese sin interferencias, dejando la administración de la cosa pública a técnicos e intelectuales supuestamente más capaces.

No pregonamos la autarquía, sino la racionalidad interna y la colaboración internacional: un nuevo orden que desierre para siempre el pillaje y la opresión de unos pueblos por otros.

Antes que pensar en exportar, es necesario pensar en cómo incorporar a la producción a los 100 mil desocupados que tiene Costa Rica, a los miles de campesinos sin tierra y a los centenares de miles de subempleados cuya labor no redundan en un crecimiento sostenido de la riqueza social.

ECA. ¿Cree usted que el modelo económico y el sistema político, puestos en práctica a partir de 1948 están "agotados"? ¿Qué tipo de correcciones haría su gobierno?

Oscar Arias Sánchez:

El modelo económico puesto en práctica en Costa Rica a partir de 1948 ha permitido al país alcanzar un nivel de desarrollo sumamente elevado en muchos campos; por ejemplo en salud, educación, obras públicas, electrificación, etc. Ahora bien, es obvio que dicho modelo no puede ser estático, sino que debe adaptarse a las nuevas circunstancias. Precisamente eso es lo que estamos proponiendo en el campo económico: impulsar un nuevo estilo de desarrollo, más acorde con las posibilidades reales de nuestro país, enmarcado en una modernización de nuestra economía simultáneamente con un intenso programa de reivindicación social y democratización económica.

Ahora bien, lo que sí debemos mantener como una constante es la vigencia del sistema político democrático, pero sin asumir una actitud conformista sino vigilante, manteniendo una lucha constante por su perfeccionamiento, por hacer de nuestra democracia una democracia más justa, más libre, más tolerante y más solidaria.

Rafael A. Calderón Fournier:

Totalmente agotados. El gigantismo estatal, cuyos gérmenes se encuentran en 1948, la excesiva intervención del Estado, el despilfarro de las instituciones descentralizadas que se mueven como moros sin señor, la falta de controles legales en muchas de ellas, la irracionalidad del gasto público y las inversiones (las pérdidas por 17 mil millones de colones de la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), son sólo algunos ejemplos.

Propugno por el respeto al principio de la caja única del Estado. Porque funcione el principio de la subsidiariedad del Estado y porque la participación popular teniendo a la persona como el centro de todas nuestras inquietudes, nos conduzca a la realización del bien común al cual nos debemos. El gigantismo estatal ha traído también la corrupción. El Estado debe concentrarse a cumplir las funciones esenciales y todas aquellas otras en las cuales esté de por medio la promoción del bien común, ya sea en economía, en cultura y en lo social. No creo en el desmantelamiento del Estado, lo cual es absurdo, actitud que a veces nos atribuyen con irracionalidad nuestros adversarios y ello es tan inconsistente como que

significaría abogar por el caos mismo, lo cual obviamente no es mi propósito.

Rodrigo Gutiérrez:

Todo análisis hecho por nosotros coincide con los principales analistas de la derecha de que el modelo económico está terminado. Divergimos de ellos, naturalmente, en cuanto al diagnóstico de las causas y las soluciones. Tanto el Partido Liberación Nacional (PLN) como la Unidad Social Cristiana (USC) coinciden en "liberalizar" la economía, dándole campo a las leyes de mercado y reduciendo el rol del Estado, pero en el fondo, ni ellos ni nosotros creemos que sea posible hacerle correcciones. Simplemente el modelo no da más.

Alvaro Montero Mejía:

Durante la década de los años 40, se generaron en Costa Rica reformas sociales inéditas en muchos países de América Latina. Estas reformas sociales fueron el producto de una alianza muy amplia, gestada en la coyuntura histórica de la lucha mundial contra el fascismo. Para llevarlas a cabo, se unieron las fuerzas organizadas del movimiento obrero y popular, la iglesia costarricense, sensible e inteligente y los máximos dirigentes de una burguesía nacional que aún tenía fe y confianza en las posibilidades de una democracia con una proyección social avanzada. Manuel Mora Valverde, Monseñor Víctor Sanabria y el Dr. Calderón Guardia presidente de la república, fueron los hombres que simbolizaron aquella alianza. Después de la guerra civil de 1948, José Figueres completa ese ciclo de reformas sociales, con tres transformaciones que remataron el periodo reformista de los años 40: fueron estas la nacionalización bancaria, la abolición del ejército y la constitución del tribunal electoral que garantizaba la pureza del sufragio. Hubo otras reformas importantes como el impuesto sobre la renta y la modernización del Estado con la creación de las instituciones autónomas, que constituyeron las bases del actual sistema social costarricense. Pero estas reformas se encuentran hoy profundamente erosionadas, trastornadas, vencidas e invalidadas en sus verdaderos alcances y proyecciones, por la crisis y por el avance del capitalismo con sus métodos de concentración de la propiedad y la riqueza. El código de trabajo ha sido "reinterpretado" en los tribunales de justicia, limitando sus alcances y los derechos fundamentales de la organización sindical, el seguro social brinda servicios médicos cada vez más deficientes y limitados, no por culpa de los trabajadores hospitalarios, sino por la crisis financiera general del sistema de salud; la banca nacionalizada dejó prácticamente de serlo, para verse envuelta en un sistema "mixto," donde el poder de los financistas privados nacionales y extranjeros es hoy determinante; el ejército está en pleno proceso de consolidación, a pesar de que se le enmascara con medios propagandísticos muy sutiles; con el impulso y el apoyo de Estados Unidos, se acelera el proceso de militarización del país y se fortalece el espíritu castrense con la incorporación de agentes militares israelíes y boinas verdes norteamericanos, encargados del entrenamiento de nuestros guardias civiles y rurales. Finalmente, los propios procesos electorales se convierten en campañas donde la movilización de recursos multimillonarios resulta el ingrediente indispensable para el éxito en las urnas.

ECA. En la línea de resolver los graves problemas costarricenses, ¿cómo define la filosofía política de su partido?

Oscar Arias Sánchez:

El mensaje que divulga y sus realizaciones corresponden a un modelo que está en función de los problemas que se le presentan al país en esa etapa de su historia. Liberación Nacional ha impulsado un modelo de desarrollo que ha permitido enfrentar satisfactoriamente los problemas básicos de Costa Rica en los últimos 35 años. Hoy en día los problemas son distintos y el partido se está renovando para ofrecer respuestas adecuadas a ellos.

Ahora, aún cuando el proyecto político que propone nuestro partido se vaya adecuando a las necesidades de los tiempos, yo diría que su papel sigue siendo el mismo. Una fuerza equilibradora y democratizadora de la vida nacional y fundamentalmente el único partido capaz de llevar a cabo la aspiración óptima que debe cumplirse hoy en Costa Rica: crecimiento económico con estabilidad y con justicia social dentro de un régimen de libertad. En estos términos resumiría la esencia de nuestra filosofía política.

Rafael A. Calderón Fournier:

Somos un partido social-cristiano, que cree en el bien común, en la participación popular, en la importancia de la persona humana y en la convicción de que ésta es portadora de valores inmanentes que deben ser protegidos y promovidos.

Rodrigo Gutiérrez:

Alianza Popular es una coalición entre el Partido Vanguardia Popular (el partido comunista de Costa Rica) y el Frente Amplio Democrático, organización política que lucha por realizar reformas profundas de corte democrático popular que la sitúan dentro de la izquierda nacional. Por lo tanto, la "línea" filosófica la define el programa de Alianza Popular donde se reivindica el pluralismo, la economía mixta, la ampliación y profundización de los derechos democráticos, el fortalecimiento de la independencia y la soberanía nacionales y la más amplia participación popular organizada en todos los niveles donde se ejerce el poder político.

Alvaro Montero Mejía:

La Coalición Pueblo Unido está formada por varias fuerzas, organizaciones políticas y personalidades democráticas de Costa Rica. A Pueblo Unido lo integran el Partido Socialista Costarricense, el Partido del Pueblo Costarricense que es el partido comunista, el Movimiento de la Nueva República, (M.N.R.) que es una organización progresista y revolucionaria, el Partido Radical Demócrata que es la expresión de grupos sociales y personalidades de centro izquierda, y un número importante de representantes de organizaciones y movimientos cívicos, social-demócratas y social-cristianos, que mantienen vigencia en importantes localidades del país. Esta composición pluralista de nuestra coalición, no nos permite como alianza de fuerzas patrióticas y democráticas, adscribirnos a una ideología única. El factor ideológico aglutinante está dado por el carácter progresista, avanzado, latinoamericano y revolucionario de nuestros planteamientos. La Coalición Pueblo Unido es pues democrática y revolucionaria. Nuestro afán primordial es el de sumar a todos los sectores y fuerzas sociales que tengan en Costa Rica una verdadera capacidad de lucha por las urgentes transformaciones que planteamos en nuestro programa. Pero también nuestro deber es entender que esas fuerzas sociales, gravitan hoy en tor-

no a las agrupaciones políticas tradicionales de Costa Rica. Nuestro deber es atraerlas y hacerlas partícipes de los cambios sociales formulados en nuestro programa y de una actividad política donde expresen de manera clara su respaldo a una consecuente política de paz, a la lucha contra la intervención extranjera en nuestros países, al desarrollo de una política exterior basada en el respeto mutuo y a la solidaridad con todos los pueblos que luchan y en particular de respeto y amistad con el proceso revolucionario que viven el pueblo de Nicaragua y otros pueblos de Centroamérica.

ECA. Encontrándose Costa Rica en la línea media entre Nicaragua con un régimen de nuevo tipo y Panamá que tiene bases norteamericanas en su territorio, ¿qué política exterior seguirá su país para conservar y defender la democracia representativa imperante en el país?

Oscar Arias Sánchez:

Estando inmersos en un mundo en crisis, cada día más determinado por las relaciones entre los Estados y que se enfrenta a la amenaza de una guerra que nos podría aniquilar a todos, la política exterior de nuestro país debe orientarse, más que nunca, dentro de los principios del diálogo, la paz y la no intervención en los asuntos internos de otros países, pero con la suficiente hidalguía para defender nuestros puntos de vista y nuestros intereses como nación independiente y soberana.

Nuestro carácter de país sin ejército nos obliga, también más que nunca, a mantener nuestra confianza en los organismos internacionales, especialmente el sistema jurídico interamericano, y contribuir en todo momento a su fortalecimiento.

Rafael A. Calderón Fournier:

Nuestra política exterior está signada por el principio de no intervención, contenido en las cartas de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. También queremos ejecutar una diplomacia activa, coherente, proyectada al mundo, con la conciencia de que una buena política internacional ha de servir a los fines del desarrollo económico, de la justicia social internacional y del bienestar del ser costarricense con la vigencia de los valores humanos y materiales que nos son tan caros.

Rodrigo Gutiérrez:

Luchamos por impulsar una política exterior sustentada sobre los principios fundamentales de la doctrina de la convivencia universal de los pueblos: el derecho a la autodeterminación, a la no intervención y a que las diferencias entre los países se resuelvan mediante la negociación y jamás por la solución militar. El derecho de cada país a desarrollarse independientemente. El establecimiento de un nuevo orden económico mundial que garantice un trato justo en las relaciones comerciales y económicas entre los países. Fortalecimiento de la existencia y el normal funcionamiento de los organismos internacionales que garantizan la independencia y los derechos de todos los estados, especialmente los pequeños, sin que ello signifique violación de los principios de igualdad de los Estados, independencia y los derechos de todos los Estados, especialmente los pequeños, sin que ello signifique violación de los principios de igualdad de los Estados, independientemente de su tamaño y de su fuerza. En síntesis, luchamos por la paz y la seguridad internacionales a través de: el respeto a los principios básicos de derecho internacional

incluidos en la carta de las Naciones Unidas, del desarme general y completo, particularmente el termonuclear, y sobre todo, a través del respeto y la aplicación efectiva de los derechos humanos en todas las naciones del mundo.

Alvaro Montero Mejía:

Decíamos hace un momento, que Costa Rica es una pieza codiciada por Estados Unidos. Por nuestra ubicación, somos un eslabón importante en la geopolítica centroamericana. Nos encontramos entre dos naciones que representan puntos muy sensibles en la situación política internacional. Panamá es la llave de los dos grandes océanos. Como zona canalera que es, representa un enclave cardinal en la estrategia militar de Estados Unidos. Nicaragua, lleva adelante un proceso revolucionario, democrático y popular, que se ha convertido en un objetivo militar y político de primer orden, dentro de los planes de la administración norteamericana en Centroamérica.

En estas condiciones la única política viable y que al mismo tiempo resulta compatible con los principios de soberanía, de independencia, de latinoamericanismo y dignidad nacional, es una política de paz, de buena vecindad, de no alineamiento. Estamos y estaremos invariablemente porque los conflictos centroamericanos se resuelvan por medio del diálogo y la negociación y no por medio de la intervención o la presencia militar extranjera. Cualquiera que desee la paz en Centroamérica, debe aceptar que en Guatemala se termine para siempre la existencia de un Estado terrorista y que se abra el camino para la instauración de una auténtica democracia en ese hermano país. Nadie puede creer en un proceso vigilado por las bandas de asesinos profesionales o garantizado por un ejército que tiene sobre sus espaldas la sangre de 75.000 guatemaltecos asesinados. En El Salvador, la paz no pasará jamás por el proyecto genocida que pretende la derrota militar de las fuerzas populares y revolucionarias o que pregonan la "necesidad" genocida de 100 mil muertos para la pacificación del país, provocados claro está, con la ayuda directa del ejército norteamericano y la administración del presidente Reagan.

La paz en Centroamérica pasa por la salida del ejército de ocupación de Honduras, que ha convertido a esa hermana república centroamericana en base permanente del expansionismo norteamericano en Centroamérica. La paz de nuestros pueblos exige el cese inmediato de la agresión militar política, económica y propagandística que Estados Unidos ha lanzado contra Nicaragua.

Pero no deseamos gobernar para mantener una confrontación de ningún tipo con el gobierno norteamericano. No deseamos, como no lo desean los demás pueblos centroamericanos, ser pieza de ningún ajedrez internacional. Por eso si el gobierno norteamericano exige seguridades, nosotros estamos dispuestos a dárselas. Costa Rica no será nunca un instrumento contra la seguridad de ningún país ni base de agresiones contra nadie.

ECA. ¿Qué opina de la política de neutralidad activa y permanente del actual gobierno?

Oscar Arias Sánchez

Comparto plenamente la neutralidad que ha impulsado el presidente Monge, en cuanto ella recoge el deseo de Costa Rica, convertido en norma de conducta de nuestro país desde hace muchos años, de no intervenir en los conflictos bélicos

ajenos a nuestra nación. No creo, sin embargo, que sea conveniente darle rango constitucional a dicho principio en las actuales circunstancias. Ello precisaría de un consenso político entre los principales sectores del país, lo que no existe en la actualidad. Pero el pueblo costarricense puede estar muy tranquilo de que un próximo gobierno de Liberación Nacional no involucrará al país en ningún conflicto ajeno a nosotros.

Rafael A. Calderón Fournier:

La política llamada de neutralidad del actual gobierno lo que ha demostrado es que se niega a sí misma y abandona la posición de siempre, que históricamente ha sido en Costa Rica la del compromiso con el principio de no intervención y de adhesión a los valores éticos y políticos de las democracias occidentales, con las cuales estamos totalmente identificados.

Rodrigo Gutiérrez:

Esa declaración pudo permitirle al gobierno del Sr. Monge asumir una posición independiente del papel que le asignó el departamento de Estado de Estados Unidos dentro de la ejecución de la "doctrina" de Caspar Weinberger para Centroamérica, pero le faltó voluntad para ejecutarla. Jurídicamente el mismo gobierno se encargó que el proyecto fuera un verdadero adesio. La débil actitud del gobierno de Monge ante las demandas del gobierno de Reagan, le restó credibilidad dentro y fuera de Costa Rica. La constante tolerancia y complicidad de buena parte de la oficialidad de la guardia civil y rural y de los ministros superiores jerárquicos a estos cuerpos, para el funcionamiento de bases y un poderoso aparato logístico que la contrarrevolución y la CIA ha utilizado para agredir a Nicaragua, le restó autoridad moral al gobierno de Costa Rica para acogerse efectivamente a una posición de neutralidad frente al conflicto centroamericano. En estos momentos, Costa Rica es parte beligerante del conflicto centroamericano y la proclama de neutralidad sólo sirve para "mostrar internacionalmente a una Costa Rica democrática, desarmada y neutral frente a una supuesta Nicaragua totalitaria, fuertemente armada, expansiva y agresora.

Alvaro Montero Mejía:

Desde el mes de noviembre de 1983 en que el presidente Luis Alberto Monge hizo pública su proclama de neutralidad, nosotros apoyamos esa política y llamamos al fiel cumplimiento de los objetivos de paz comprendidos en ella. Nuestro pueblo, consciente de que la neutralidad abre el camino de la paz, respalda masivamente esa propuesta. Consideramos que la misma corresponde a los mejores intereses de Centroamérica y al esfuerzo que debe hacer Costa Rica por no convertirse en una pieza de la acción política militar que Estados Unidos despliegan en Centroamérica. Por eso de manera permanente y firme, hemos respaldado esa política de neutralidad. Ahora bien, el gobierno ha incumplido reiteradamente los propósitos proclamados en aquel entonces. Han surgido en su seno importantes contradicciones. De un lado se encuentran aquellos que están por la ejecución cabal de la neutralidad y por el honrado cumplimiento de todos los extremos señalados en la proclama. Otros, sin embargo, desean convertir la proclama de neutralidad en una fachada para vender en el exterior la imagen de un gobierno con vocación de paz, mientras en la práctica se permite la presencia activa de las fuerzas contrarrevolucionarias de Nicaragua y se facilitan los proyectos propagandísticos y bélicos de la administración norteamericana. No ignoramos que el gobierno de



Monge es víctima de esas contradicciones. Ignorarlo es no tener un adecuado conocimiento de la realidad. Pero fachada o no, propuesta hipócrita o no, ¿cuál es el deber de las fuerzas progresistas de Costa Rica? ¿Cuál es el deber de los patriotas y los revolucionarios? ¿No es acaso luchar a brazo partido porque esa política proclamada se cumpla integralmente? ¿No es acaso nuestro deber respaldar a aquellos elementos, por tímidos y débiles que sean, que estando dispuestos a cumplirla, hacen oír su voz desde el gobierno y desde otras instituciones del Estado?.

Nuestra respuesta es clara. A la vez que denunciarnos las violaciones permanentes a la proclama de neutralidad, respaldamos el contenido de la proclama y llamamos a nuestro pueblo a unirse para luchar por el fiel cumplimiento de ella y a respaldar a todos los que se propongan convertirla en una realidad.

ECA. ¿Hará esfuerzos su administración por ampliar los efectivos de seguridad pública? ¿Conoce usted las reacciones del pueblo costarricense ante las medidas que tiendan a la "militarización" del país?

Oscar Arias Sánchez:

El pueblo costarricense es un pueblo pacífico, acostumbrado a vivir en paz y este sentimiento fue recogido desde 1949, al consagrarse en nuestra constitución política, por iniciativa de los fundadores del Partido Liberación Nacional, la abolición del ejército como institución permanente. Por ello, el costarricense rechaza la militarización. Sin embargo, Costa Rica está inmersa en una zona de crisis y, querámoslo o no, esa crisis nos afecta. Nuestras fuerzas policiales se encontraban casi desprotegidas, sin equipo y sin la preparación ade-

cuada para enfrentar, tanto la delincuencia a nivel interno, agravada por el ingreso masivo de refugiados, como las amenazas a nuestra integridad territorial que en varias ocasiones ha ejecutado el régimen nicaragüense. Por eso, el actual gobierno le ha dado mucho énfasis a la necesidad de preparar mejor nuestras fuerzas policiales y este es un esfuerzo que continuaremos en el próximo gobierno. Pero ello de ninguna manera implica la militarización del país. A ello se opondría todo el pueblo costarricense.

Rafael A. Calderón Fournier:

Más que de ampliación del número de efectivos de seguridad pública, me gustaría hablar de la puesta en práctica de un plan de perfeccionamiento de los existentes y de estabilidad en sus cargos de aquéllos que se hayan distinguido por su capacidad y por su lealtad a los valores democráticos y cívicos de un pueblo que no cree en la militarización y que tampoco está pensando —yo tampoco personalmente ni como candidato presidencial— en la creación de un ejército, lo cual iría contra nuestras mejores tradiciones y en perjuicio del desarrollo de los programas sociales, de salud y educación.

Rodrigo Gutiérrez:

Las ajustaremos a las reales necesidades nacionales en cuanto a su seguridad interna, pero nos declaramos en forma terminante en que su adiestramiento sea militar. Primero, porque lo consideramos innecesario y segundo, porque nuestras tradiciones históricas nos convencieron desde los albores de la república que un ejército, como institución, no se justifica para mantener el orden interno y la seguridad externa.

A diferencia de las "democracias formales" o de mentirillas, en Costa Rica la población se inscribe y milita sin temor en los partidos políticos, sea cual sea su ideología.

Alvaro Montero Mejía:

El actual ministro de seguridad pública es fundador de uno de los grupos extremistas de derecha más notorios que existen en nuestro país: el Movimiento Costa Rica Libre. Es natural entonces, que su actividad ministerial refleje el mayor entusiasmo por el fortalecimiento de los planes de Estados Unidos hacia Costa Rica. Esos planes comprenden la creación de un ejército. Así, expresándose en términos ambiguos y pregonando su adhesión al marco civilista, el gobierno acepta de hecho el desarrollo de esos planes. No sólo recibe con beneplácito las importantes ayudas económicas de carácter militar, ayudas cuyo monto y extensión crecen todos los años, sino que construye una base militar en la zona del Murciélagos, a 30 kilómetros de Nicaragua, donde 40 boinas verdes, cuyas prácticas y desapego a los principios de civilización y humanidad son bien conocidos, adiestran y adoctrinan a grupos importantes de nuestros guardias civiles y rurales, con el pretexto de fortalecer su capacidad como guardianes de la frontera. En otros campos, el entrenamiento ha estado a cargo de grupos especiales de instructores israelitas, como parte de ese esfuerzo permanente y concienzudo por convertir a los cuerpos de policía costarricenses en la base de un futuro ejército. Esta actividad contraviene, todos los sentimientos de paz y civilidad tan arraigados en la conciencia del costarricense. La actividad no es sólo militar sino ideológica. Se inculca en los reclutas el odio al sandinismo y a las fuerzas revolucionarias de Centroamérica, a las que se califica de antidemocráticas y terroristas. El gobierno apela por su parte, al manido pretexto de una posible agresión sandinista contra nuestro país. Como vemos, no es la primera vez que se inventa la existencia de un falso enemigo, con el fin de obtener y consolidar objetivos antidemocráticos.

ECA. ¿Podrá Costa Rica mantener la tradicional democracia liberal y representativa, cuya paz social es orgullo del país o se verá envuelta, por insatisfacciones populares, en polarizaciones sociales y conflictos similares a los que sufre el resto de Centroamérica?

Oscar Arias Sánchez:

En materia política, y sobre todo en lo que se refiere a Costa Rica, yo soy un optimista incurable. Ciertamente, cuando se analizan algunos de los problemas que afronta el país, sobre todo en el marco de la crisis que viven nuestros hermanos centroamericanos, cuando se ve la dificultad de encontrar soluciones a corto plazo, muchos de los costarricenses más conscientes se sienten vacilantes o atemorizados.

Sin embargo, creo que Costa Rica es un país con grandes posibilidades, sobre todo humanas. Los hombres y mujeres de Costa Rica son nuestra más grande riqueza. Nuestro pueblo tiene una gran madurez política, formada en el marco de la democracia y la libertad. Confío seguro en que este pueblo generoso y recto será capaz de superar los problemas que hoy nos acechan y hacer grandes cosas en el futuro.

Rafael A. Calderón Fournier:

Esta pregunta es muy importante. El resultado de las elecciones próximas está resuelto en nuestro favor, aunque

continuamos luchando tenazmente para obtener una sustancial mayoría parlamentaria en el próximo congreso, de manera que podamos aprobar las legislaciones necesarias para hacer los cambios que Costa Rica reclama. Sin embargo, pienso que nos jugamos algo más que un resultado electoral: el país, apoyándome a mí, ha de decidir que quiere cambiar para cambiar, para en consecuencia aumentar los niveles de vida, responder eficientemente a las crecientes demandas del pueblo en salud, educación y seguridad social, logros necesarios para evitar la explosión social y que sólo se obtendrán si aumentamos la producción y la productividad como única vía de obtener un desarrollo que nos permita distribuir la riqueza acumulada y no la pobreza que todo lo frustra y daña.

Rodrigo Gutiérrez:

Eso depende, desde luego, de si la clase gobernante y sus dos partidos políticos, el PLN y la USC, están dispuestos a rectificar sus proyectos, que se han convertido en un monumental fracaso de sus gobiernos alternos de los últimos 37 años, desde el punto de vista de los intereses populares. Personalmente creo que hay voluntad política de parte de ellos para rectificar. Al contrario, todos los dirigentes de esos partidos políticos y los cuadros más destacados de los sectores económicos que en conjunto defienden los intereses de la clase gobernante, muestran testadurez en continuar apegados al proyecto que ellos mismos reconocen como fracasado, pero que ahora intentan reanimarlo con viejas e ineficaces recetas del más trasnochado liberalismo.

Alvaro Montero Mejía:

Costa Rica ha vivido en los últimos años un intenso proceso de polarización económica. La crisis ha permitido la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Es perfectamente previsible que a mediano plazo, esa polarización económica se convierta también en polarización política. Pero la respuesta no puede ser tan simple como ubicar de un lado a los grupos y clases acaudaladas y del otro al pueblo insurgente, en lucha activa por sus grandes reivindicaciones históricas. Si las organizaciones populares y democráticas no logran imprimirle una nueva dinámica al proyecto de constitución de un frente de fuerzas patrióticas y progresistas, que modifique el esquema político tradicional que ha vivido nuestro país en las últimas décadas, la polarización bien podría abrirse paso, pero no entre las fuerzas conservadoras y el movimiento popular, sino a través de un régimen de extrema derecha con apoyo popular. Podría ocurrir, que sectores populares muy amplios, le brinden su apoyo a un gobierno fuerte, de ribetes facistas, sólo porque a sus ojos aparezca como capaz de poner orden en medio de la corrupción, la demagogia y el caos económico.

ECA. ¿Considera necesario que Costa Rica vuelva a contar con un ejército profesional? ¿Mantendrá la decisión constitucional de 1949 de un desarme unilateral? ¿Cómo se protegerá Costa Rica de cualquier agresión?

Oscar Arias Sánchez:

Una de las decisiones más sabias que tomó la junta de gobierno de 1948-49 y que luego ratificaron todos los gobier-

nos de nuestro país hasta el presente, fue la de eliminar el ejército como institución permanente. Gracias a ellos, nuestro país ha podido destinar a la educación, a la salud, a la electricidad y al agua potable recursos que, de otra manera, se habrían empleado en mantener una casta militar incómoda y voraz. Son muchos los ejemplos que pueden ayudarnos a mostrar las ventajas que Costa Rica tiene en este campo con respecto a otros países. Por ello, decimos no rotundo a la formación de un ejército.

Ahora bien, de ninguna manera la ausencia de un ejército permanente es sinónimo de indefensión. Costa Rica tiene un gran aliado: el derecho internacional, a cuyos mecanismos hemos confiado nuestra defensa como nación pacífica y desarmada, a la par, por supuesto, de la dignidad y la valentía de nuestro pueblo, que no dudaría en defender nuestra soberanía cuando ello fuera realmente necesario.

Rafael A. Calderón Fournier:

El ejército es innecesario y no lo quiere el pueblo de Costa Rica ni lo quiero yo ni mi partido, como lo dije en la pregunta precedente. Por consiguiente, nuestro desarme es unilateral. Para protegernos en estas condiciones, requerimos fundamentalmente contar con un cuerpo diplomático y con una cancillería dinámicos, activos, capaces y profesionales, y hacia eso vamos. En todo caso, también preveo que si el deterioro del área continuara produciéndose, entonces pugnaría por la firma de tratados de ayuda mutua con naciones amigas, como en el pasado ya se hizo con Venezuela.

Rodrigo Gutiérrez:

Me parece que ya adelantamos criterio en las respuestas a la pregunta 9. Nosotros consideramos que si cumplimos con una política externa conforme la definimos en la respuesta a la pregunta 7, no vamos a crear condiciones que nos enfrenten a nuestros vecinos. Claro que una posición internacional independiente y no alineada desafía la política exterior sustentada por Estados Unidos. Pero creemos que mediante el diálogo y la solidaridad internacional —inclusive del mismo pueblo norteamericano— el gobierno de ese país finalmente tendrá que reconocernos, a los países centroamericanos, nuestro derecho a una vida independiente y soberana.

Alvaro Montero Mejía

La historia de América Latina, demuestra que los ejércitos han sido construidos como elementos apropiados para la agresión y la represión interna y no para preservarnos de las agresiones externas. En Costa Rica, como en la mayoría de los pueblos latinoamericanos, un ejército sólo es necesario para mantener privilegios, para reprimir las manifestaciones de descontento.

En Costa Rica desde luego que el gobierno norteamericano lo utilizaría también para consolidar en nuestro territorio una base de operaciones militares con Nicaragua.

Los costarricenses somos conscientes de que aceptar que continúe adelante los planes militares norteamericanos en aceptar su proyecto de ocupación militar de largo plazo en Centroamérica. Por eso decidimos, ¿para qué un ejército?. El mejor escudo moral contra la intervención y la agresión, es nuestra decisión de ser un país sin ejército, respetuoso de todos los pueblos del mundo, capaz de desarrollar sus relaciones sobre la base del respeto mutuo, de la colaboración entre las naciones, del respeto invariable a los principios de su soberanía y no intervención.

ECA. ¿Cuál es la posición de su partido ante las revoluciones del resto de Centroamérica? ¿Cuáles debieran ser las formas y medios para solucionar los conflictos de la región?

Oscar Arias Sánchez:

Nuestra posición con respecto al conflicto centroamericano ha sido muy clara. La única salida es a través de la democratización auténtica de las naciones del área. No puede justificarse el cambio social si implica el sacrificio de la libertad, mediante la instauración de regímenes totalitarios.

Desde nuestra perspectiva, entonces, paz y democracia van íntimamente ligadas, y apoyamos los esfuerzos del Grupo de Contadora en cuanto es, por el momento, el mecanismo idóneo para hacer eso una realidad.

Calderón Fournier:

Creo en la paz y en el diálogo. Creo en el papel de los organismos internacionales para la consecución de esa paz y de aquel diálogo (en primera instancia en la OEA), institución que a su vez deberá ser reavivada y puesta al día para que el mejor cumplimiento de los fines para los cuales fue creada. Reitero que ante los sucesos de Centroamérica deberemos ser respetuosos del principio de no intervención, excepto en cuanto toca al enjuiciamiento y condena de la violación de los derechos humanos, porque estamos comprometidos con nuestra propia tradición y además porque debemos honrar los acuerdos internacionales en esa materia y de los cuales somos confirmantes como país.

Rodrigo Gutiérrez:

Nosotros nos declaramos solidarios con el derecho de los pueblos centroamericanos a darse un gobierno que legítimamente represente sus intereses y que impulse las transformaciones necesarias que terminen con las condiciones de pobreza y atraso que viven nuestros países. Pero al mismo tiempo, como lo hemos declarado ya reiteradamente en respuestas anteriores, creemos en el diálogo, en la solución negociada y jamás aceptaremos la violencia institucionalizada, la represión popular y la guerra impuesta por Estados Unidos, como un recurso justificado por las clases gobernantes centroamericanas para impedir el progreso de la justicia social en nuestros pueblos.

Alvaro Montero Mejía:

Los conflictos armados en Centroamérica, son el producto directo de dos situaciones. La primera, las seculares violaciones a todos los derechos económicos, sociales y humanos de nuestros pueblos. La segunda, la participación activa de Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Algunos a estas alturas introducen en el análisis la interesada concepción de que somos parte de la lucha este-oeste. Eso significa pasar por alto que nuestros pueblos luchan, se organizan, se sacrifican y combaten la injusticia, desde muchos años antes de que aparecieran sobre la tierra expresiones ideológicas radicales. Mucho antes de la revolución soviética, de la revolución cubana y de la revolución nicaragüense, los pueblos centroamericanos emprendieron batallas heroicas contra la opresión y la injusticia.

La paz entonces, solo podrá ser garantizada con la eliminación de esos dos factores. Sin el apoyo de Estados Unidos, ninguna fuerza oligárquica resistiría la voluntad democrática de nuestros pueblos. Con la excepción de Costa Rica y Nicaragua todos los demás gobiernos centroamericanos se susten-

tan en la fuerza interna que les proporcionan los ejércitos y en el respaldo internacional que les proporciona Estados Unidos. El problema no es tampoco como se ha querido propagar el resultado de una confrontación entre concepciones democráticas y concepciones totalitarias. La verdad sea dicha, Estados Unidos y los grupos acaudalados de nuestros países no están dispuestos a aceptar que sus intereses se vean afectados aunque esa lucha se de en nombre de las convicciones y los postulados ideológicos más amplios y democráticos. Sin embargo, un sentido elemental de realismo, nos obliga a buscar soluciones urgentes, inmediatas, a los conflictos más agudos. Porque la cuota de sacrificio que se le impone a nuestros pueblos es extremadamente alta. Respal damos en ese sentido los esfuerzos de Contadora. Consideramos ese conciliábulo internacional como una base útil para la paz. De Centroamérica deben salir todos los asesores extranjeros; el gobierno de Estados Unidos debe cesar su agresión directa contra Nicaragua e iniciar de inmediato un diálogo orientado a la búsqueda de la paz, a la garantía del respeto a la autodeterminación de ese hermano país; el diálogo en El Salvador debe continuar, orientado al encuentro de una solución acorde con las exigencias de su pueblo heróico, agotado por la explotación de la oligarquía más rapaz y acaudalada de Centroamérica y desangrado por la guerra que esa oligarquía le impone.

Es más urgente que nunca la instauración de un régimen democrático legítimo en Guatemala. Ya es hora de que se acabe para siempre el terror y la muerte desatados por el ejército y las bandas en ese país. Los centroamericanos exigimos que nuestra hermana Honduras deje de ser una república ocupada, convertida en una inmensa base militar del ejército norteamericano.

Nuestras exigencias son en el fondo no sólo justas, sino también simples: autodeterminación, democracia integral, justicia para nuestros pueblos. La historia ha demostrado que el camino de estas reivindicaciones es a veces doloroso, lleno de sacrificios. Pero a pesar de las dificultades es la marcha ascendente hacia la libertad. Nuestros pueblos lograrán la victoria.

ECA. ¿Tiene Estados Unidos de América una política correcta en Centroamérica o por el contrario su intervención está regionalizando el conflicto?

Oscar Arias Sánchez:

Sería ingenuo achacar a Estados Unidos toda la responsabilidad de la crisis que vive la región. Hay que reconocer que parte de esa responsabilidad debemos asumirla los propios centroamericanos y es claro que también la Unión Soviética a través de Cuba está participando activamente en el conflicto. Por tanto, creo que lo que debe buscarse es el retiro de ambas potencias, pero a partir del consenso de los centroamericanos en torno a la democratización de todos los países del área. Reitero que mientras no se logre instaurar un régimen auténticamente libre y representativo en todos y cada uno de los países centroamericanos, va a ser muy difícil lograr la paz.

Rafael A. Calderón Fournier:

Nuestros problemas se pueden internacionalizar con motivo de la lucha este-oeste. Centroamérica debe ser una región de paz y de justicia social. La segunda debe ser garante de la primera.

Rodrigo Gutiérrez:

La política norteamericana solo defiende los intereses de Estados Unidos y no toma en cuenta nuestros intereses, los de nuestros pueblos. Por lo tanto, desde cualquier punto de vista que se la analice, su política es ilegal e inmoral.

Es necesario señalar que la política norteamericana va dirigida a lo que en la doctrina Weinberger señalan como de "destrucción del potencial armado del enemigo y de ocupación de su territorio." Es por lo tanto, en cuanto a Nicaragua se refiere y, desde luego, en cuanto al territorio salvadoreño controlado por el FMLN, estratégica y tácticamente ofensiva. Esta doctrina establece:

1) El uso de sus tropas cuando el gobierno de Estados Unidos consideren afectados "sus intereses" o los de sus aliados.

2) Que el uso de la fuerza militar debe asegurar una victoria aplastante; (ese fue el caso de Grenada donde comprometieron 300 mil hombres en toda la operación).

3) La intervención militar debe tener claros objetivos políticos y militares. Entre los políticos la acción iría dirigida a "destruir el comunismo en Centroamérica" y restituir la libertad y la democracia en Nicaragua." Con estos objetivos buscan el apoyo del congreso de Estados Unidos y la neutralización de la oposición en el congreso y el senado.

Para alcanzar ese objetivo han lanzado las más extraordinarias campaña diplomática y propagandística de los últimos años para "demostrar" que Nicaragua es pieza vital del terrorismo internacional, probando hilos secretos entre la situación del medio oriente, con Libia y la OLP, la ETA y Nicaragua. Además, en Nicaragua supuestamente se violan los derechos humanos, se persigue a la Iglesia y en general se muestra al gobierno nicaragüense, mediante declaraciones y noticias que se originan en "fuentes generalmente bien informadas" como un gobierno totalitario, que divide la familia nicaragüense, expansivo, que abastece la guerrilla salvadoreña y que agrede a Honduras y a la inerte y democrática Costa Rica. Entre los objetivos militares están, básicamente, armar a los países vecinos de Nicaragua y justificar las bases y las maniobras militares en suelo hondureño y costarricense (entre febrero de 1983 y septiembre de 1985, 18 de cada 30 días se han realizado maniobras militares conjuntas, se estableció una base de entrenamiento militar para la guardia civil costarricense en El Murciélagos, a sólo 4 kilómetros de la frontera nica y se han enviado en visitas de "buena voluntad" a más de 5 naves de guerra, algunas de ellas armadas con ojivas atómicas, como el destructor *Iowa* y una cantidad no determinada de aviones y helicópteros).

4) La relación entre los objetivos de la intervención y las fuerzas comprometidas deben ajustarse a las evaluaciones de cada situación. Y esto se ha manejado según los resultados de la capacidad ofensiva de la "contra" nicaragüense, del éxito en la simulación de ataques que aparezcan como de procedencia del Ejército Popular Sandinista o de la "capacidad" de los gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Honduras para bloquear los esfuerzos de Contadora para pacificar Centroamérica. En todos los casos se han puesto en práctica la máxima de Kissinger que estableció, claramente, que "la idea de que la fuerza y la diplomacia se deben mantener separadas y consideradas aisladamente, falsifica su esencia. La fuerza sin un objetivo se queda en un simple caso de ostentación. La diplomacia sin fuerza se agota en su misma retórica."

Por lo tanto, la intervención de Estados Unidos en Centroamérica no solamente ha regionalizado el conflicto, si-

no que va dirigida a utilizar sus tres recursos básicos para derrotar a la revolución nicaragüense y a la salvadoreña: utilización de los contrarrevolucionarios, el castigo selectivo de blancos llamados por ellos tácticos (que van desde bombardeo de bases y puestos militares, económicos y civiles hasta otras formas como han sido minar puertos, el terrorismo, etc.) y cuando no quede otra posibilidad, la intervención directa del ejército norteamericano.

NOTAS

1. CEPAL. *Anuario Estadístico de América Latina*. Santiago de Chile, 1984.
2. Juan Diego Trejos. *Costa Rica, políticas de distribución y re-distribución del ingreso en la década de los setentas*, Universidad de Costa Rica: IIES, 1979.
3. Juan Manuel Villasuso. *Evolución de la crisis económica en Costa Rica y su impacto sobre la distribución del ingreso*. Universidad de Costa Rica: IIES, 1982.
4. Michell Seligson. "Agrarian Reform in Costa Rica". *Inter-American Economic Affairs*, XXXV, 4, 1983. Citado por José Luis Vega Carballo en su estudio *Costa Rica 1983: ¿Podrá sobrevivir la suiza centroamericana?* (mimeo, 1983).
5. Manuel Rojas. *La crisis centroamericana*, San José: FLACSO-EDUCA, 1985.
6. Villasuso, *op. cit.*
7. Ricardo Fernández Guardia. *Costa Rica en siglo XIX*. Selección de varios estudios, escritos por viajeros europeos y norteamericanos. San José: EDUCA, 1970. Véase declaraciones de Facio y Volio Jiménez en *La Nación*, 20 de noviembre de 1983.
9. Eduardo Oconitrillo. *Un siglo de política costarricense*, San José: Editorial UNED, 1982.

